



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
Radicación: 05001-31-05-005-2021-00071-01
Demandante: Álvaro León Vásquez Franco
Demandado: Colpensiones
Asunto: Apelación y Consulta
Procedencia: Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente: Sandra María Rojas Manrique
Temas: Pensión de vejez

Medellín, julio quince (15) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por las apoderadas de la parte demandante y de la parte demandada, así como el grado jurisdiccional de consulta, en favor de Colpensiones, en los aspectos no apelados, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, el 23 de marzo del año 2022, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por el señor ÁLVARO LEÓN VÁSQUEZ FRANCO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, Radicado 05001-31-05-005-2021-00071-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor ÁLVARO LEÓN VÁSQUEZ FRANCO, instauró demanda ordinaria laboral, en contra de COLPENSIONES, pretendiendo se le reconozca la pensión de vejez, por acreditar los requisitos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 del 2003, liquidándola teniendo en cuenta el IBL del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con el porcentaje establecido en el artículo 34 ibídem, modificado por la Ley 797 del 2003, con los intereses moratorios y la indexación.

Los supuestos fácticos que apoyan las anteriores pretensiones, se sintetizan en que el demandante nació el 10 de abril de 1950, presentó traslado al Régimen de Ahorro Individual, retornando a Colpensiones en virtud de una acción de tutela, siendo vinculado el 1º de junio del 2011.

Explicó que el 15 de octubre del 2014 solicitó la pensión de vejez, la cual le fue negada por Resolución GNR 34835 del 2015, por cuanto para el 5 de diciembre del 2014, contaba con 1144 semanas, lo que implicó que el hoy reclamante continuara cotizando, haciendo hincapié en el hecho que del reporte de semanas impreso de la página web de Colpensiones, el 18 de julio del 2016, así como del reporte de semanas que la accionada envió al accionante, con fecha de corte el 31 de diciembre del 2016, se reflejan 1215.14 semanas y 1237 semanas respectivamente, reportes que presentan inconsistencias con los periodos cotizados al Régimen de Ahorro Individual.

Aseveró que en el nuevo reporte de semanas cotizadas impreso de la página de Colpensiones, el 24 de enero del 2020, se totalizan 967 semanas hasta diciembre del 2019, modificándose arbitrariamente los días de cotización desde septiembre de 1996 a mayo del 2011, pasando de 30 días a 0 días, con la observación “no vinculado traslado RAI”, procediendo el actor, el 4 de

febrero del 2020, a solicitar aclaración de las inconsistencias presentadas, posteriormente, el 2 de julio del 2020, solicitó corrección de la historia laboral y un nuevo estudio de la pensión de vejez, toda vez que Colpensiones no tuvo en cuenta que si bien el actor, para el momento en que se efectuaron los aportes de septiembre de 1996 a mayo del 2011, se encontraba afiliado al Régimen de Ahorro Individual, lo cierto del caso es que a través de la sentencia de tutela se ordenó el traslado del actor al Régimen de Prima Media, incluyendo los aportes realizados en el Régimen de Ahorro Individual.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada, oportunamente **COLPENSIONES**, dio respuesta al libelo introductorio, indicando que, respecto del traslado efectuado por el accionante, al Régimen de Ahorro Individual, estos periodos no se pueden computar hasta tanto sean cancelados efectivamente por dicho régimen.

A su vez, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión de vejez sin el cumplimiento del requisito de semanas; inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios; improcedencia de la indexación de las condenas e intereses moratorios de manera simultánea; prescripción y compensación.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 23 de marzo del 2022, el Juzgado de conocimiento declaró que al actor, le asiste derecho a la pensión de vejez, bajo los presupuestos de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003; condenó a Colpensiones a pagar la pensión vitalicia de vejez, a partir del 14 de febrero de 2018, con derecho al disfrute a partir del 2 de julio de 2020, en cuantía de \$2.403.619, por 13 mesadas; condenó a la demandada a reconocer \$56.234.058, por retroactivo liquidado entre el 2 de julio de 2020 y el 31 de

marzo de 2022, suma sobre la cual operan los descuentos para salud y que a partir del 1° de abril de 2022, se le reconozca una mesada de \$2.579.575, valores sobre los cuales operan los descuentos por salud; condenó a Colpensiones a reconocer los intereses moratorios, a partir del 2 de noviembre del 2020 y hasta que se realice el pago y condenó en costas a la demandada.

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

Demandante

La apoderada del actor formuló recurso de apelación, en cuanto al cálculo efectuado por el Despacho del IBL y el valor de la mesada pensional, argumentando que no cuenta con el tiempo para comparar el cálculo efectuado por la misma y el presentado por el Juzgado, teniendo en cuenta para ello que el accionante presenta IBC diferente en cada mes, apareciendo incluso cotizaciones por varios empleadores en un mismo ciclo, solicitando se revise el IBL de los últimos 10 años y el valor de la mesada reconocida al actor, teniendo como fecha final de cotización el 2 de julio del 2020.

Colpensiones

La apoderada de la entidad interpuso recurso de apelación en contra de la providencia de primera instancia, solicitando se revoque la misma, por no encontrarse de acuerdo con las semanas tenidas en cuenta para el reconocimiento de la pensión de vejez, por cuanto hasta la fecha de contestación de la demanda, en la historia laboral no reposaba el número de semanas requeridas para el reconocimiento pensional.

De igual forma adujo no estar conforme con la condena al pago de intereses moratorios, insistiendo en que, al estudiar el derecho pensional en vía administrativa, se encontró que el demandante no contaba con las semanas requeridas, solicitando se revoque la condena a la mismos, incluso en caso de

confirmarse la sentencia, teniendo en cuenta para ello que la entidad si tenía una justificación para no reconocer el derecho pensional, por no acreditar el actor los requisitos legales.

También apela la condena al retroactivo argumentando que para la entidad no es aceptable el retiro tácito del sistema. Solicita que, en el evento de confirmarse la providencia, se verifiquen los cálculos y de encontrarse alguna inconformidad, se modifique o revoque la sentencia al igual que la condena en costas.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunció la apoderada de la parte demandada, reiterando los argumentos planteados en la sustentación del recurso de apelación, tendientes a que la providencia sea revocada.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

De igual forma procede la consulta, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante*”.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que el señor Álvaro León Vásquez Franco, nació el 10 de abril de 1950, tal y como se desprende de la copia de la cédula de ciudadanía obrante en el documento *03. Demanda Álvaro León Vásquez Franco.pdf folio 10* del plenario.
- Que el actor se trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el ISS al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a través de la AFP Protección S.A., el 22 de enero del 2000, con fecha de efectividad el 1° de marzo del 2000, retornando a Colpensiones el 5 de abril del 2011, con fecha de efectividad el 1° de junio del 2011, información que se extrae del certificado de SIAFP aportado por la demandada –ver documento *15 Expediente Administrativo GEN-REQ-INT-2020_1503798-20200326105954 folio 1* del plenario-.
- Que por sentencia de tutela proferida por el Juzgado Veintitrés Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, el 17 de marzo del 2011, se tuteló el derecho fundamental a la igualdad y a la libre escogencia de la seguridad social del actor, ordenando al extinto ISS que en el término de 48 horas procediera a afiliarse al demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, ordenando a Protección S.A. que desafilie al tutelante y traslade la totalidad del ahorro efectuado por el mismo al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, por presentarse una situación de múltiple vinculación –ver documento *15 Expediente Administrativo GEN-REQ-INT-2020_3890154-20200403125227 folios 4 a 9* del plenario-.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si tiene derecho el promotor del proceso a la pensión de vejez, en aplicación de la Ley 797 del 2003, estableciendo si cumple con la densidad de semanas exigidas?

¿Si es procedente reconocer la pensión de vejez al actor, de manera retroactiva, pese a no acreditarse la novedad de retiro del sistema?

¿Si el IBL liquidado por el Juzgado, se encuentra ajustado a derecho?

¿Si es viable reconocer intereses moratorios?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, i) el actor reúne los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez, en la forma pretendida, esto es, en aplicación de la Ley 797 del 2003; ii) no tiene derecho al reconocimiento de retroactivo pensional alguno, al no acreditarse el retiro del sistema, quedando supeditado el disfrute de la prestación a su desafiliación; iii) al no haber condena a retroactivo pensional no se causan intereses moratorios; en consecuencia, la sentencia debe ser REVOCADA en los numerales tercero y cuarto y parcialmente en el numeral segundo, para en su lugar ABSOLVER a la demandada del reconocimiento y pago del retroactivo pensional e intereses moratorios, CONFIRMÁNDOLA en las demás partes, por las razones explicadas a continuación.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

El derecho a la pensión de vejez, en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se adquiere una vez confluyen los requisitos de edad y

número de cotizaciones o tiempo de servicio señalado por el legislador en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que dispone:

“ARTÍCULO 9o. El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

- 1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o sesenta 60 años de edad si es hombre.*
- 2. Haber cotizado un mínimo de 1.000 semanas en cualquier tiempo.*

PARÁGRAFO 1º. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, y en concordancia con lo establecido en el literal f) del artículo 13 se tendrán en cuenta:

- a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones;*
- b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados;*
- c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre que la vinculación laboral se encuentre vigente o se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente Ley;*
- d) El número de semanas cotizadas a cajas provisionales del sector privado que tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión;*
- e) Derogase el parágrafo del artículo 7º de la Ley 71 de 1988.*
- f) En los casos previstos en los literales c) y d), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora”.*

En complemento de la regulación anterior, el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 10 de la Ley 797 del 2003, que modificó el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, establecen la forma en la que se liquida la pensión de vejez:

“ARTICULO 21. Ingreso Base de Liquidación. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta Ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si éste fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo”

“ARTÍCULO 10. El artículo 34 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

*Artículo 34. Monto de la Pensión de Vejez.
(...)*

A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:

El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

$r = 65.50 - 0.50 s$, donde:

r = porcentaje del ingreso de liquidación.

s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima”.

2.6.- CASO CONCRETO

En el sublite, se encuentra acreditado que el demandante, nació el 10 de abril de 1950, habiendo presentado traslado al Régimen de Ahorro Individual, a través de la AFP Protección S.A., el 22 de enero del 2000, con fecha de efectividad el 1° de marzo del 2000, retornando a Colpensiones el 5 de abril del 2011, con fecha de efectividad el 1° de junio del 2011.

Asimismo, se encuentra que por Resolución GNR 34835 del 14 de febrero del 2015, Colpensiones le negó la pensión de vejez al demandante, argumentando que contaba con 1144 semanas cotizadas en toda su vida laboral, advirtiéndole que podía seguir cotizando para alcanzar las semanas requeridas o solicitar la indemnización sustitutiva -ver documento *03. Demanda Álvaro León Vásquez Franco.pdf folios 13 a 19* del plenario-.

Para resolver la apelación, inicialmente precisa la Sala, que el gestor del proceso no es beneficiario del régimen de transición, pese a tener más de 40 años de edad al 01 de abril de 1994, dado que no acredita el requisito de las 750 semanas a la vigencia del acto legislativo 01 de 2005 para que esta prerrogativa se extienda más allá del 31 de julio de 2010, contando para este hito temporal con 713.12 semanas, pretendiendo en su demanda el reconocimiento de pensión de vejez en aplicación de la Ley 797 del 2003, razón por la cual debe acreditar los requisitos generales vigentes para acceder a la prestación, vale decir, 62 años de edad y 1300 semanas de cotizaciones en toda su vida laboral.

En cuanto al primer requisito se tiene acreditado que el demandante arribó a los 62 años de edad, el 10 de abril de 2012, cumpliendo con el primero de los requisitos exigidos para acceder a la prestación hoy debatida.

Y, en cuanto a las semanas de cotización, punto neural de discusión por las partes, debe señalarse que se aportaron diversas historias laborales al plenario, las cuales, en orden cronológico, arrojan la siguiente información:

i) La historia del 18 de julio del 2016 reporta 1215.14 semanas -ver documento *03. Demanda Álvaro León Vásquez Franco.pdf folios 29 a 49-*.

ii) La historia del 31 de diciembre del 2016 reporta 1237.86 semanas -ver documento *03. Demanda Álvaro León Vásquez Franco.pdf folios 50 a 53 -*.

iii) La historia del 24 de enero del 2020 reporta 967 semanas -ver documento *03. Demanda Álvaro León Vásquez Franco.pdf folios 54 a 81-*.

iv) La historia del 7 de octubre del 2020 reporta 997.43 semanas -ver documento *03. Demanda Álvaro León Vásquez Franco.pdf folios 83 a 113-*.

v) La historia del 6 de diciembre del 2021 reporta 1431 semanas – ver documento *15 Expediente Administrativo GRP-SCH-HL-66554443332211_2148-20211206085922 folios 1 a 54 del plenario-*.

Del estudio de las distintas historias laborales, advierte la Sala que las diferencias en el número de semanas reflejadas en ellas, radica en el hecho que en las que reportan un menor número de cotizaciones, no se tienen en cuenta los aportes que se ordenó fueran trasladados por Protección S.A., atendiendo a la acción de tutela interpuesta por el actor, en procura de obtener su retorno a Colpensiones, siendo claro que la historia laboral expedida por la demandada el 6 de diciembre del 2021, es la actualizada y de la cual se desprende que el mismo satisface el requisito de las 1300 semanas para acceder a la pensión de vejez en la forma solicitada en la demanda, por cuanto cuenta con 1431 semanas cotizadas.

De conformidad con lo expuesto, el pretensor reúne el actor los requisitos para acceder a la pensión de vejez.

Causación de la pensión

Sobre este punto, explicó el a quo que el actor alcanzó las 1300 semanas, el 14 de febrero del 2018, siendo ésta la fecha de causación de la pensión, mientras que el disfrute, sería el 2 de julio del 2020, fecha en la cual solicitó nuevamente la pensión de vejez y para la cual ya reunía los requisitos de ley.

Al respecto se tiene que la regla general del disfrute de la prestación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 13 y 35 de Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, lo es que para la inclusión en nómina de pensionados es requisito previo que se acredite la desafiliación del sistema, cuando se trata de trabajadores del sector privado. Así lo recordó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL1810 del 27 de mayo de 2020:

“En ese orden, es evidente y surge nítidamente del precepto en comento (artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990), que para poder entrar a disfrutar de la pensión de vejez, es necesaria la desafiliación del sistema, lo que consecuentemente indica que mientras no exista esa desafiliación, el pensionado no puede recibir el importe de la mesada. ...

Ante ese panorama, la Corte reitera que el cumplimiento de los requisitos para obtener el reconocimiento pensional, no supone una desafiliación automática del sistema. Ello es así porque, como se vio, el retiro efectivo del sistema es una condición necesaria para el disfrute de la pensión, formalidad que no puede deducirse de la simple cesación en el pago de los aportes, más aún si, al margen de que un trabajador consolide el derecho a la pensión de vejez en determinado momento, mantiene la posibilidad de seguir afiliado y continuar cotizando, evento en el cual esos aportes adicionales tendrán como propósito incrementar el monto pensional, cuya cuantía quedaba determinada en el momento de dicha causación (sentencia CSJ SL 15091-2015).”

La excepción a la regla general, se presenta en dos situaciones, la primera, en torno a desafiliación formal, que no resulta necesaria para los casos en los cuales es posible, a través de otros hechos acreditados en el proceso, deducir la voluntad inequívoca del afiliado de no continuar cotizando al sistema para acceder al derecho pensional y la segunda situación, corresponde a aquellos asuntos en los cuales las cotizaciones posteriores del reclamante se presentan por la inducción en error, por parte de la administradora pensional, cuando se niega injustificadamente el derecho, así lo precisó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia:

“No obstante lo anterior, esta Sala, en situaciones particulares, en las cuales la utilización de la regla de derecho de la interpretación textual ofrece soluciones insatisfactorias en términos valorativos, ha acudido a otras alternativas hermenéuticas para dar respuesta a esos casos que, por sus peculiaridades, ameritan una solución diferente.

Así, por ejemplo, en tratándose de eventos en los que el afiliado ha sido conminado a seguir cotizando en virtud de la conducta renuente de la entidad de seguridad social a reconocer la pensión, que ha sido solicitada en tiempo, la Corte ha estimado que la prestación debe reconocerse desde la fecha en que se han completado los requisitos (CSJ SL, 1º sep. 2009, rad. 34514; CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 39391; CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 39391; CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 38558; CSJ SL, 15 may. 2012, rad. 37798).

También, en contextos en los cuales la conducta del afiliado denota su intención de cesar definitivamente las cotizaciones al sistema, se ha considerado que la prestación debe ser pagada con antelación a la desafiliación formal del sistema (CSJ SL, 20 oct. 2009, rad. 35605; CSJ SL4611-2015, en esta última, si bien fueron consideraciones efectuadas en sede de instancia, la Corte ahora las reitera en sede de casación).

En este orden, podría decirse que si bien la regla general sigue siendo la desvinculación del sistema como requisito necesario para el inicio de la percepción de la pensión, existen situaciones especiales que ameritan reflexiones igualmente particulares, y que deben ser advertidas por los jueces en el ejercicio de su labor de dispensar justicia (...) »

(Sentencia SL5603 de 2016 M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO)

Debe apartarse entonces la Sala de la decisión del a quo, en cuanto a la fecha del disfrute del derecho del actor, ello por cuanto, no se puede tener como tal el 2 de julio del 2020, dado que el accionante no atendió el requerimiento de la administradora pensional, aunado a que continuó realizando cotizaciones, pese a que contaba con la posibilidad de cesar en las mismas, en cuanto al riesgo de pensiones, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, lo que no acaeció. En la pluricitada historia laboral expedida por Colpensiones, el 6 de diciembre del 2021, se reportan cotizaciones hasta el mes de octubre del 2021, registrando 30 días cotizados por dicho ciclo, sin que se alcanzara a reportar aún el mes de noviembre del 2021, reconociendo la apoderada del demandante en los alegatos en primera instancia, que su representado aún labora y cotiza y que esto obedece al hecho que las empresas en las cuales presta sus servicios, no lo dejan cesar en sus cotizaciones hasta tanto lleve la resolución que acredite que es pensionado, exigencia del empleador, que en primer lugar no se encuentra acreditada y que en segundo lugar, resulta ser contraria a derecho.

Aunado a lo anterior, en este caso no se presentó una inducción en error al demandante, que lo llevara a continuar cotizando, ello por cuanto para el 15 de octubre del 2014, fecha en la que solicita la pensión de vejez de manera inicial, el mismo no reunía el requisito de semanas necesarias, presupuesto que solo satisfizo para el 14 de febrero del año 2018, tal y como lo indicó el señor Juez, por lo que ninguna consideración adicional se debe realizar en este sentido.

Ahora, efectivamente, el 2 de julio del 2020, la parte accionante solicitó se realizara un nuevo estudio de su pensión de vejez, tal y como se desprende del documento *03. Demanda Álvaro León Vásquez Franco.pdf folios 25 a 28* del plenario, encontrando en el expediente administrativo allegado por la accionada, que el mismo día se expidió un comunicado dirigido al actor, en el

que relacionaban diversos documentos que debía aportar, a efectos de dar trámite a su solicitud –ver documento *15 Expediente Administrativo GEN-RES-CO-2020_6338828-20200706102822 folios 1 a 2 del plenario*–, sin acreditarse que se hubiere cumplido con dicha exigencia.

De tal manera que no se emitió pronunciamiento por la administradora, toda vez que el accionante no aportó la documentación que le fue requerida, esto es *“formato solicitud de prestaciones económicas, documento de identidad del afiliado, formato de información de EPS, formato de declaración de no pensión, formato cuenta pago, poder ante Notario, documentos del abogado (..)”* lo que da lugar al desistimiento y archivo de la reclamación de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.

Así las cosas, se hace necesario modificar la providencia de primera instancia, en el sentido de expresar que procede el reconocimiento de la pensión de vejez al actor, quedando supeditado su disfrute, a que se realice el retiro del sistema o la cesación de las cotizaciones.

En cuanto al IBL, atendiendo al recurso de apelación formulado por la accionante debe señalarse que efectuadas las operaciones respectivas teniendo en cuenta la última cotización acreditada en el proceso al 30 de octubre de 2021, el IBL de toda la vida laboral, asciende a \$4.074.437, mientras que el de los últimos 10 años corresponde a \$4.554.886, siendo mucho más favorable este último.

Ahora, es claro que el IBL liquidado por esta corporación, resulta superior al establecido por el a quo, diferencia que obedece al hecho que debe tomarse los diferentes IBC reportados por cada ciclo de cotización para promediar el IBC, de cada periodo, ello por cuanto el demandante, en su labor de docente, prestó servicios simultáneos para varias instituciones de educación superior, reportando cada una de ellas el IBC de acuerdo al número de días laborados en determinado ciclo, encontrando que el Juzgado, en su tabla de liquidación, no

consolido el IBC, sino que indicó en cada periodo, los diferentes IBC y cada uno de ellos lo tuvo en cuenta por el número de días que se laboró.

No obstante, se considera que no es posible determinar el monto de la prestación, dado que las semanas cotizadas en adición a las que reporta la última historia laboral, tienen incidencia en el IPC que debe tenerse en cuenta para determinar el IBL, así como respecto a la tasa de reemplazo, siendo procedente ordenar que Colpensiones que liquide la pensión una vez se acredite la desafiliación del sistema.

En cuanto a la condena a los intereses moratorios, la misma habrá de ser revocada, por cuanto no existe mora de la administradora pensional en virtud del archivo de la solicitud por incumplimiento del requerimiento de documentos adicionales y al no causarse retroactivo alguno.

Sin costas en esta instancia.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **REVOCAN** los **numerales tercero y cuarto y parcialmente el numeral segundo** de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, el 23 de marzo del 2022, en el proceso ordinario instaurado por el señor ÁLVARO LEÓN VÁSQUEZ FRANCO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, para en su lugar **ABSOLVER** a la

demandada del reconocimiento y pago del retroactivo pensional e intereses moratorios, conforme lo expuesto.

2.- Se **CONFIRMA** la sentencia en lo demás.

3.- Sin costas en esta instancia.

4.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE


JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO